



CAMPO Y CAMPESINOS EN LA ESPAÑA MODERNA

CULTURAS POLÍTICAS EN EL MUNDO HISPANO

**MARÍA JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ
ALFREDO MARTÍN GARCÍA**

(EDS.)

[ENTRAR]

CRÉDITOS

CAMPO y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el mundo hispánico (Multimedia)/María José Pérez Álvarez, Laureano M. Rubio Pérez (eds.); Francisco Fernández Izquierdo (col.). – León: Fundación Española de Historia Moderna, 2012

1 volumen (438 págs.), 1 disco (CD-Rom): il.; 24 x17 cm.

Editores lit. del T. II: María José Pérez Álvarez, Alfredo Martín García

Índice

Contiene: T. I: Libro – T. II: CD-Rom

ISBN 978-84-938044-1-1 (obra completa)

ISBN T. I: 978-84-938044-2-8 (del libro)

ISBN: 978-84-938044-3-5 (CD-Rom)

DEP. LEG.: LE-725-2012

1. Campesinado-España-Historia-Edad Moderna 2. Culturas políticas-España-Historia I. Pérez Álvarez, María José, ed. lit. II. Rubio Pérez, Laureano M., ed. lit. III. Martín García, Alfredo, ed. lit. IV. Fernández Izquierdo, Francisco, col. V. Fundación Española de Historia Moderna. VI.

323.325(460)''04/17''

316.74:32(460)

Edición:

Fundación Española de Historia Moderna
C/Albasanz, 26-28 Desp. 2E 26, 28037 Madrid (España)

© Cada autor de la suya

© Fundación Española de Historia Moderna

© Foto portada: *Mataotero del Sil*

Editores de este volumen:

María José Pérez Álvarez

Alfredo Martín García

Coordinación de la obra:

María José Pérez Álvarez

Laureano M. Rubio Pérez

Alfredo Martín García

Colaborador:

Francisco Fernández Izquierdo

Imprime:

Imprenta KADMOS

Compañía, 5

37002 Salamanca

[VOLVER]

Evolución y funcionalidad del comunal en la Sierra de Guadarrama (Madrid), siglos XV-XVIII¹

Javier Hernando Ortego

Departamento de Análisis Económico: Teoría Económica e Historia Económica

Universidad Autónoma de Madrid

javier.hernando@uam.es

Resumen

Desde la Edad Media la organización del comunal en el Real de Manzanares (Sierra de Guadarrama) presentó una estructura compleja derivada del reconocimiento de los derechos de la villa y tierra de Madrid. Nos encontramos ante unos comunales compartidos pero claramente asimétricos. El crecimiento demográfico y las necesidades económicas de las comunidades locales del Real chocaron con la pretensión madrileña de mantener estática la gestión del comunal. El conflicto entre Madrid y los concejos del Real por su control se planteó en dos niveles: el judicial, en el que la ciudad obtuvo el reconocimiento de sus derechos, y la práctica sistemática de ocupaciones por parte de los vecinos de la Sierra. Gracias a esta resistencia, los concejos del Real consiguieron aumentar el control y capacidad de gestión del común. Desde comienzos del s. XVII ambas partes llegaron a un acuerdo que significó la transferencia de buena parte de estos recursos a los vecinos del Real. Esto posibilitó la adaptación del comunal para posibilitar la especialización del territorio en la producción y transporte de combustible (leña y carbón vegetal) al mercado madrileño.

Palabras Clave

Comunales compartidos; conflicto por comunales; sostenibilidad del comunal; cercamientos.

Evolution and functionality of commons in the Sierra de Guadarrama (Madrid), 15th to 18th centuries

Abstract

Since the Middle Ages local inhabitants of the Real de Manzanares (Sierra de Guadarrama) had to share commons with the people of Madrid. This situation of “shared commons” caused many conflicts over the use of resources. Madrid obtained the support of the courts, but the resistance of local councils of the Real caused a long-term change in the allocation of common rights: their control of commons made possible specialization in the supply of fuel to Madrid.

Keywords

Shared commons; conflict over commons; commons sustainability; enclosures.

El régimen comunal en Castilla se articula desde la Edad Media en torno a la preeminencia de la villa o ciudad sobre un término jurisdiccional en el que se asientan las aldeas dependientes, la tierra. Este entramado jurisdiccional estructura el comunal en dos categorías, con derechos de acceso diferenciados: por un lado los de villa y los de las aldeas, con derecho de uso reservado exclusivamente a los vecinos de cada localidad; por otro, los comunales de villa y tierra, con acceso para todos los habitantes de la tierra y a los de la villa, a los que en ocasiones se añaden otros agentes externos (Mesta, carreteros)². En este caso estamos ante *comunales compartidos*,

¹ Trabajo financiado por el proyecto “Permanencias y cambios en la sociedad del Antiguo Régimen (ss. XVI-XIX). Una perspectiva desde Madrid”, Plan Nacional de I+D+I, Referencia HAR2011-27898-C02-02

² Resulta útil la ya clásica clasificación de J. M. MANGAS NAVAS (1981). *El régimen comunal agrario de los concejos de Castilla*. Madrid: Ministerio de Agricultura, p. 129 y ss.

cuya sostenibilidad puede verse comprometida por diferencias entre los agentes participantes. Resulta de interés por ello recurrir al conocido modelo teórico de Elinor Ostrom sobre los principios que determinan la continuidad a largo plazo de las instituciones colectivas. Precisamente la primera de estas condiciones es que existan unos límites bien definidos tanto de los individuos con derecho como del recurso comunal; de forma que reducir el grupo de comuneros limitaría el riesgo de sobreexplotación³.

En este trabajo se estudia la transformación que experimentaron los comunales compartidos como consecuencia del conflicto planteado entre las instituciones participantes en el territorio denominado Real de Manzanares, un espacio señorial de la actual comunidad de Madrid, en el que en el s. XVIII se localizaban un total de 23 localidades.

Desde el punto de vista geográfico, el Real de Manzanares constituye un área de montaña media situada en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama, con una superficie en torno a los 1.000 kms², que desciende desde la línea de cumbres hasta las proximidades de las llanuras sedimentarias. Dentro de ella, se diferencian dos unidades orográficas: la zona montañosa, con localidades situadas a una altitud de 1.100-1.200 m, y la rampa o piedemonte, de transición, con un relieve menos quebrado y en el que los pueblos se sitúan a una altitud en torno a 800-1000 m. En el área montañosa apenas se pudieron desarrollar cultivos (destinados básicamente al autoconsumo), mientras la ganadería y la explotación forestal eran las producciones básicas; por su parte, el piedemonte presentaba condiciones algo más favorables para el desarrollo agrario⁴. Nos encontramos ante un territorio cuya orientación productiva se centra en los recursos ganaderos y forestales, lo que permite una complementariedad económica con las zonas de llanura, de vocación agrícola.

Comunales y jurisdicción en la Edad Media

El espacio que constituye el Real de Manzanares se integró dentro del término jurisdiccional de Madrid por concesión real en 1152. Era un área escasamente poblada desde la época musulmana, que Madrid pretendía convertir en su “saltus”, destinado a unos aprovechamientos silvopastoriles que complementarían la producción agraria del entorno de la villa. Las condiciones naturales y la débil ocupación humana en el pasado daban como resultado la existencia de un paisaje de bosques casi continuos.

Pero los derechos legales de Madrid serán contestados pronto por la expansión territorial del concejo de Segovia⁵. Durante el avance de la reconquista Segovia irá colonizando e

³ OSTRUM, E. (1990). *Governing the commons. The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 91-92.

⁴ Disponemos de sólidas investigaciones geográficas sobre este territorio, con amplia perspectiva histórica, comenzando con VALENZUELA RUBIO, M. (1977). *Urbanización y Crisis Rural en la Sierra de Madrid*. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local. Más recientes y muy centradas en el estudio del comunal: MANUEL VALDÉS, C. M. (1996). *Tierras y montes públicos en la sierra de Madrid (Sectores central y meridional)*. Madrid: Ministerio de Agricultura (que estudia la mayor parte del Real de manzanares) y SÁEZ POMBO, E. (2000). *Montes públicos, territorio y evolución del paisaje en la Sierra Norte de Madrid*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Consejería de Medio Ambiente (que incluye 3 localidades del Real).

⁵ TORMO, E. (1946). “El estrecho cerco del Madrid de la Edad Media por la admirable colonización segoviana”. *Boletín de la Real Academia de la Historia*, t. CXVIII, pp. 47-205. Este veterano trabajo se detiene en la señorialización del Real de Manzanares. Su interpretación del conflicto está muy alejada de la aquí planteada.

incorporando zonas del sur del Sistema Central que permitan ampliar los circuitos de su ganadería trashumante. Frente a esta política de ocupación y poblamiento, el objetivo de Madrid se dirige a mantener una débil presencia humana y la reserva para los usos ganaderos y la explotación forestal. A lo largo de más de un siglo ambos concejos se enfrentarán por el dominio del territorio con dos modelos diferentes de organización del espacio. Un conflicto común, por otra parte, a otros concejos de la Extremadura castellana y de la Transierra, salvo por su intensidad y duración. A mediados del s. XIII la monarquía intervino, reservándose directamente la jurisdicción del desde entonces denominado Real de Manzanares, si bien lo hizo de forma temporal, ya que a partir de 1304 el territorio pasó a convertirse en señorío. En 1383 la titularidad recayó finalmente en la casa de los Mendoza, que a mediados del s. XV lo convirtió en el condado del Real de Manzanares.

Desde el momento en que la monarquía decidió apartar su jurisdicción de ambos concejos, reconoció a la villa y tierra de Madrid pleno derecho a los aprovechamientos comunales en dicho territorio, concretados en los denominados cuatro derechos: pacer, cortar leña, elaborar carbón vegetal y cazar. Aunque había perdido la jurisdicción sobre el territorio, el acceso a los comunales era en principio similar al que tendrían sus vecinos en caso de que el Real hubiera formado parte de su término, lo que parecía garantizar la obtención de los recursos ganaderos y forestales (objetivo prioritario de los madrileños). Por ello la política del municipio consistió en aceptar la señorialización como un proceso irreversible y centrar sus esfuerzos en garantizar el acceso a los madrileños.

Se había formado así un régimen comunal caracterizado por derechos compartidos entre dos entidades administrativas, la villa y tierra de Madrid por un lado y el señorío y las comunidades aldeanas del Real por otro. La sostenibilidad a largo plazo de esta fórmula dependía de la compatibilidad de intereses entre ambas sobre los recursos generados por los comunales y en la implementación de mecanismos de gestión que garantizaran soluciones coordinadas en su apropiación. La gestión de los derechos comunales compartidos en el Real de Manzanares resultó complicada desde el principio, pero en modo alguno inviable. Hasta mediados del siglo XV se intentó desarrollar fórmulas que posibilitaron su ejercicio, pero a lo largo de los siglos XV y XVI se desató una conflictividad creciente que terminó por comprometer la sostenibilidad del comunal, obligando a los agentes a innovar los derechos de propiedad y las fórmulas de gestión⁶.

Los primeros enfrentamientos se deben a la presión señorial, que dificultó la práctica de los derechos madrileños, lo que obligó al municipio a reclamar confirmaciones legales de la monarquía. La reiteración de estos documentos (hasta en 13 ocasiones entre 1268 y 1327) demuestra la oposición continua de los titulares del señorío, a la que se añade una problemática que a largo plazo va a resultar más trascendental: el desarrollo de la ocupación humana con el establecimiento de nuevas poblaciones, lo que obligaba a una más precisa delimitación de los términos públicos. Durante un siglo, entre mediados del XIV y del XV, se buscó una solución negociada: el concejo madrileño por una parte y el señor y los concejos del Real por otra establecieron “concordias” o acuerdos para regular la gestión de los comunales. En ellos se recono-

⁶ Un análisis más detallado en HERNANDO ORTEGO, J. (2003). *El patrimonio municipal de Madrid en el Antiguo Régimen. Bienes de propios, comunales y baldíos, siglos XI-XVIII*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, pp. 107-122.

cían los derechos comunales de los vecinos de Madrid, si bien se hacía referencia ya a ciertos términos delimitados con recursos reservados a los vecinos del Real. Por otra parte, para compensar la evidente asimetría en la relación, el concejo madrileño concedía los mismos derechos a los serranos dentro de su término, con carácter temporal y a corto plazo. Pero estas fórmulas negociadas dejaron de ser viables a lo largo del siglo XV, dando paso al conflicto judicial.

El conflicto por los comunales, ss. XV-XVI

Desde mediados del s. XV se agravaron las disputas por el uso de recursos compartidos entre la ciudad de Madrid y las comunidades rurales del Real de Manzanares. Hasta comienzos del s. XVII los enfrentamientos se plantearon en forma de pleitos, con frecuentes recursos y sentencias, en los que se evidencia la profunda contradicción de intereses entre los contendientes por el uso del espacio, lo que en última instancia va a suponer comprometer la sostenibilidad a largo plazo del comunal. La contradicción principal se plantea cuando el sistema de derechos de uso compartidos establecidos durante el período medieval, que el concejo de Madrid pretendía mantener estático, imponga limitaciones a las transformaciones productivas y demográficas en la zona montañosa. Las estrategias de adaptación de los recursos –con la consiguiente modificación del paisaje– de las comunidades rurales se vieron así frenadas por el entorno institucional de los derechos de propiedad.

Los enfrentamientos legales se fundamentan en la exigencia madrileña de reconocimiento de sus derechos comunales y, sobre todo, en la pretensión de mantener totalmente inalterada la forma de uso del territorio existente en el período medieval⁷. Al ser la mayor parte del espacio de naturaleza comunal, las comunidades rurales se encontraron imposibilitadas para adaptar el territorio y sus usos, viéndose obligadas a seguir operando dentro de una organización del espacio “fossilizada”. La vía judicial se remonta a 1437, cuando una sentencia ratificaba estos derechos comunales de Madrid en todo el territorio del Real excepto en las tierras cultivadas y las dehesas ya existentes y reconocidas de los concejos locales. Se establecía así una organización del espacio en la que sólo las propiedades individuales y las dehesas previamente acotadas y reconocidas a los pueblos quedaban excluidas del acceso de los madrileños. Un nuevo pleito comenzó en 1492 entre Madrid por un lado y el duque del Infantado y los concejos del Real por otro, motivado por la denuncia madrileña de la restricción que sufría en las cortas de leña por pie, y de la continuidad en la ocupación de comunales para ampliar cultivos y pastizales reservados, pero con un elemento nuevo que suponía un significativo cambio en la organización del espacio: el cercamiento de los términos usurpados como garantía de uso exclusivo. El pleito concluyó en 1500 con la orden de que para mantener los derechos de Madrid se debían derribar todos los cercamientos realizados desde la sentencia de 1437, si bien se podían mantener los nuevamente roturados, que volverían a pasto común cuando no estuvieran cultivados. Las quejas por parte de Infantado y localidades del Real sobre la actuación del ejecutor motivaron otra sentencia en 1519 que establecía la prohibición de realizar nuevos plantíos de viñas tanto

⁷ El desarrollo de los pleitos aparece en la Ejecutoria de la Chancillería de Valladolid de 1600, Archivo de la Villa de Madrid, Sección Secretaría, 3-213-2 (citaré como AVM-S) y en un extenso resumen de los procesos judiciales desde 1437, en el que además se recoge la actuación del juez ejecutor a partir de 1600, AVM-S, 2-349-1.

en tierras particulares como comunales, impidiendo asimismo los nuevos cercamientos en las propiedades particulares, pero no ordenaba derribar las cercas recientemente realizadas.

Los pleitos continuaron hasta finales del s. XVI: en 1534 la parte madrileña denuncia el reinicio de las roturaciones y cercamientos en varios pueblos del Real, si bien las sentencias definitivas se retrasaron hasta 1593 y 1598, recogidas en la ejecutoria de 1600. En ella se reconocía la libertad de cultivo y cercamiento de los concejos y vecinos del Real en sus propiedades individuales, si bien las cercas destinadas al cultivo de cereales debían abrir una puerta después de la cosecha para la entrada de ganados. Por otro lado se ordenaba derribar todo lo cercado en tierras comunales desde 1500, que debían recuperar su carácter público, prohibiendo asimismo la realización en el futuro de cualquier modificación en los comunales. Se intentaba, por tanto, volver a la organización del espacio existente un siglo antes, anulando las transformaciones productivas que se habían producido. En resumen, durante más de un siglo y medio la defensa de los derechos comunales de los vecinos de la ciudad y la jurisdicción de Madrid suponía mantener un espacio que les permitía disponer de amplios pastizales, madera para construcción y recursos energéticos como leña y carbón vegetal, pero obstaculizaba el desarrollo de la población que vivía en el territorio.

El objetivo de las comunidades rurales del Real a lo largo de los procesos judiciales fue el de conseguir la capacidad de control y exclusión sobre una parte cada vez más extensa de los términos comunales, lo que significaba cambiar su modelo organizativo, eliminando el carácter de acceso compartido a buena parte de los recursos, que pasarán a constituirse como un comunal reservado en exclusiva a los vecinos de cada localidad. Los factores que impulsan esta actuación fueron fundamentalmente el crecimiento demográfico y la maduración institucional de los concejos locales.

Desde el s. XIV aparecen indicios del aumento de la población en una zona que se encontraba escasamente poblada. La ocupación del espacio se desarrolló inicialmente mediante núcleos pequeños y dispersos, destinados a explotar los recursos ganaderos y forestales cercanos. Con el aumento demográfico se tendió a la concentración en un número más reducido de entidades habitadas, con una clara jerarquización entre ellas: de los 55 centros documentados a principios del XIV se pasa a 23 a comienzos de la Edad Moderna⁸. Los censos de 1528 y 1591 muestran la continuidad de la tendencia al crecimiento de la población: los 3.064 vecinos de la primera fecha (c. 12.250 habitantes) se han incrementado un 38% en la segunda, con una población estimada en torno a los 17.000 habitantes. Con todo, la densidad de la población era relativamente baja: los 12 hab/km² iniciales eran considerablemente inferiores a los 15 a 20 que se alcanzaban en otras zonas cercanas de la Sierra de Guadarrama, mientras que en 1591 todavía no se llegaba a los 17 hab/km² en el Real.

Ello coincide con un proceso institucional paralelo, la consolidación de las comunidades rurales y de sus instrumentos de gobierno, los concejos aldeanos. Si bien el nombramiento de los oficiales locales correspondía a la casa de Infantado, el funcionamiento del concejo abierto y la identidad de intereses de sus responsables con sus vecinos posibilitaron que el concejo se convirtiera en un auténtico órgano político-administrativo de la comunidad rural. Su capacidad de actuación se ejercía hacia el interior, regulando la actividad de los habitantes, y hacia el

⁸ CARRASCO TEZANOS, A. (2006). *La sociedad campesina en la Sierra de Guadarrama a finales de la Edad Media*. Madrid: Al-Mudayma, p. 19.

exterior, con autonomía creciente frente a los otros concejos y al propio señorío. Un hecho lo evidencia: hasta 1500 los señores aparecían junto a los representantes aldeanos en los pleitos con Madrid, pero a partir de esa fecha fueron éstos los únicos protagonistas.

Para conseguir el objetivo de reservarse en exclusiva una parte de los recursos productivos, las comunidades campesinas desarrollaron una estrategia en la que se combinaba el recurso a las vías legales con la ocupación práctica y la transformación del espacio al margen de las sentencias judiciales. Fue sin duda esta última la que garantizó el éxito parcial, ya que hemos comprobado que si las resoluciones judiciales reconocieron el derecho de los vecinos del Real a cercar sus heredamientos particulares y a mantener los comunales antiguos, continuamente ratificaron los derechos de los madrileños y dictaminaron el derribo de las cercas y roturaciones recientes. A través de las denuncias de Madrid y la actuación de los jueces ejecutores, podemos identificar dos grandes líneas de actuación de los concejos y vecinos del Real.

El primer proceso encaminado a obtener un comunal exclusivo fue el reservar un término propio, regulado por el concejo local y al que solamente los miembros de la comunidad rural tuvieran acceso. Los amplios derechos de Madrid, que se ejercían sobre todos los espacios no apropiados por individuos o concejos, determinaron que en la práctica ninguna localidad tuviera un término propio delimitado antes de la adquisición de la categoría de villa. Los concejos aprovecharon la capacidad adaptativa del comunal para comenzar a reservarse un territorio exclusivo a partir de los ejidos de cada localidad. Ya las sentencias del s. XV habían establecido que cada concejo serrano dispusiera de un ejido, situado en las cercanías de los pueblos y reservado para usos comunales de sus vecinos, los cuales se sumaban a las dehesas para constituir el terrazgo comunal local. Buena parte de los concejos recurrieron a ampliar la extensión de sus ejidos, en los que se incluían propiedades particulares y otros espacios públicos, hasta convertirlos en la práctica en su propio término municipal. Las denuncias son abundantes en la aplicación de la ejecutoria de 1600: Collado Mediano “había guardado y guardaba por exido todos sus términos y dezmería como confina con los lugares de Navacerrada y Guadarrama y Collado Villaba y Alpedrete”.

Un segundo proceso en la reasignación del espacio comunal fue la apropiación de comunales (montes o pastos) por concejos y vecinos para roturar o convertirlos en pastizales exclusivos, explotados individualmente. El cercamiento fue practicado ya en la Edad Media como garantía de reserva y protección de las parcelas. Las resoluciones judiciales reconocieron el derecho de los propietarios al cercamiento, si bien obligaron a mantener portilla que debían abrir después de la cosecha para permitir los aprovechamientos de pastos comunes. Por otra parte se prohibió la realización de cercas en las usurpaciones de comunales, a pesar de lo cual se llevaron a cabo con frecuencia, a tenor de las denuncias de Madrid. En la zona de rampa predominaron las parcelas destinados al cultivo de cereal e incluso viñas, como sucede sobre todo en el caso de Colmenar Viejo, el núcleo más poblado. Solían ser pequeñas extensiones, con frecuencia cercadas. Algunos datos: en Galapagar (298 vecinos en 1591) se denuncian 45 usurpaciones (c. el 15% de los habitantes), con una superficie media de unas 2 ha, apareciendo el 87% como cercadas. En Torreldones los 26 rompimientos suponían casi el 60% de sus 44 vecinos en 1591, con una extensión media alrededor de 1,5 ha, a lo que se añadía que el propio concejo local se había introducido a labrar una amplia superficie. En cambio, en las localidades más montañosas las ocupaciones se centran en la formación de prados, frecuentemente con

monte asociado (fresnos y robles), configurando las fresnedas, tan destacadas todavía hoy día en el paisaje serrano.

El resultado de estos procesos fue un notable cambio en la naturaleza y funcionalidad de los comunales, ya que en parte pasaron a ser cultivos y pastos dentro de explotaciones particulares. Pero no considero que se pueda hablar simplemente de un asalto anticomunalista y de un proceso de estricta privatización. La reconversión de estos comunales fue un proceso organizado por los propios concejos aldeanos, que al reservarse y distribuir estos términos están reafirmando sus derechos frente a terceros, en este caso los vecinos de Madrid y su Tierra. Toda la documentación legal deja clara la implicación de los concejos en esta reasignación del espacio comunal; tampoco hay evidencias de conflictos internos en estos momentos. La privatización de parte del comunal no acaba, sin embargo, con el papel central de éste en las economías serranas de la Edad Moderna.

Esta capacidad de gestionar y reasignar los recursos comunales se enmarca dentro del proceso ya mencionado de consolidación institucional del concejo local, reflejada en la elaboración de Ordenanzas agrarias durante la segunda mitad del s. XVI en buena parte de las localidades del Real. La iniciativa y redacción era competencia de los propios concejos, si bien debían ser ratificadas por las autoridades señoriales. Aunque el contenido se adaptaba a las necesidades productivas locales, en varios casos (Manzanares, Cerceda, Miraflores) se hacía referencia a la distribución de los términos comunales entre los vecinos, mediante dos fórmulas: adjudicaciones permanentes a los titulares o bien asignaciones redistribuidas periódicamente (sorteos). La apropiación de términos comunales aparece por tanto como un mecanismo de transferencia del factor tierra a las explotaciones familiares campesinas, garantizando la posibilidad de supervivencia y reproducción de estas explotaciones y de continuidad del crecimiento demográfico. Como ejemplo el caso de Miraflores en 1573, que repartía mediante sorteo las parcelas concejiles entre los vecinos y que prohibía volver a recibirlo hasta que el resto de los vecinos hubiera accedido a uno; en caso de sobrantes se adjudicarían a los más necesitados⁹.

En definitiva, la resistencia y generalización de las usurpaciones por parte de las comunidades campesinas del Real de Manzanares –que actúan al margen o al menos sin el apoyo explícito del señorío– les permitió superar las resoluciones judiciales, claramente favorables a los intereses de Madrid. De forma práctica, los concejos aldeanos fueron capaces de asegurarse la exclusión de terceros y la regulación de los recursos entre sus vecinos. Pero todavía quedaba pendiente obtener la sanción legal.

Resolución del conflicto y funcionalidad del comunal

En la década de 1620 Madrid y los concejos del Real –de nuevo sin intervención señorial– firmaron una serie de acuerdos que ponían fin al largo conflicto legal por los derechos comunales en el territorio. Después de más de siglo y medio de pleitos, con la mayor parte de las sentencias favorables, el municipio madrileño aceptó una nueva asignación de derechos sobre el comunal que suponía renunciar a buena parte de lo conseguido judicialmente. Este radical cambio de actitud viene motivado en primer lugar por la necesidad de abastecimiento de com-

⁹ DÍAZ ASENSIO, M. P. (1991). “La agricultura en el condado del Real de Manzanares, a través de sus ordenanzas, en los siglos XV y XVI”. *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, t. XXX, pp. 599-612.

bustible de una ciudad que desde 1561 se convierte en la capital de la monarquía española. A ello se suma, sin duda, la propia resistencia de los concejos y vecinos de la Sierra, manifestada en la persistencia de las ocupaciones y reserva de términos comunales, que obligaba a Madrid a elegir entre continuar la dinámica de pleitos, cada vez más costosos para un municipio sometido a la creciente presión de la hacienda real, o bien buscar una salida negociada. Si añadimos la posibilidad de obtener ingresos para unas maltrechas arcas municipales, tenemos un panorama explicativo de la sorprendente salida dada al secular conflicto.

Hasta mediados del s. XVI la ciudad de Madrid, con una población en torno a 20.000 habitantes en 1561, se garantizaba el combustible dentro de un área relativamente cercana, donde disponía de encinares y bosques de ribera, cuyos recursos se complementaban con los derechos sobre los recursos forestales del Real y la compra de carbón vegetal. Pero el rápido crecimiento de la población aumentó la presión sobre los espacios tradicionales de abastecimiento, provocando la ampliación del área de suministro, mientras aparecían obstáculos de tipo institucional (resistencia de comunidades y señoríos) que dificultaban el acceso a los recursos energéticos¹⁰. Esta situación explica el interés del ayuntamiento de la capital en asegurarse la disponibilidad del Real como una reserva estratégica de energía, utilizando sus derechos comunales como contrapartida en la negociación.

Desde 1604 el ayuntamiento de Madrid y varios concejos del Real consiguieron establecer unos primeros acuerdos, pero su denuncia impidió que se llegaran a aplicar. Hay que esperar al período entre 1625 y 1628 para conseguir unos acuerdos ya generalizados, con contenidos claramente especificados y que esta vez se llevarían a la práctica. El largo conflicto por los comunales de la Sierra de Guadarrama llegaba a su fin¹¹. Sólo con Colmenar Viejo, que continuó el proceso de roturaciones de términos y plantíos de viñas, se mantuvieron los procesos judiciales hasta que se consiguió un nuevo acuerdo en 1682¹².

La estructura de los acuerdos, aunque adaptados a la situación de cada aldea, resulta bastante similar. Los concejos y vecinos del Real reciben fundamentalmente el reconocimiento de los ejidos, áreas que se extendían alrededor de los pueblos y en los que los derechos comunales quedaban reservados a los vecinos de la localidad. Los concejos los habían ido ampliando, a pesar de las sentencias contrarias, hasta adquirir una extensión considerable, lo que les convertía prácticamente en un término municipal¹³. Dentro de los ejidos se integraban propiedades privadas, zonas de pasto e incluso montes. Sirva como ejemplo el ya mencionado caso del ejido de Collado Mediano; en la concordia de 1628 se reconocía a dicho lugar “que tenga y goce para sí en propiedad y a su beneplácito perpetuamente el exido que tiene que llaman de Zahondón, y

¹⁰ En el propio Real de Manzanares el señor prohibía a sus habitantes la venta de leña y carbón vegetal en Madrid en 1553. Por su parte, Madrid alegó que varias sentencias legales obligaban a los vecinos del Real a comercializar estos productos exclusivamente en esa ciudad. AVM-S, 2-395-24. Sobre esta cuestión, HERNANDO ORTEGO, J. (2012). “La política forestal en el Madrid de los Austrias. Abastecimiento de energía y regulación del monte, siglos XVI y XVII”. *Anales del Instituto de Estudios Madrileños* (en prensa).

¹¹ Se han conservado los acuerdos con las siguientes localidades: Becerril, Cerceda, Cercedilla, Collado Mediano, Guadalix, Hoyo de Manzanares, Manzanares, Mataelpino, Navacerrada y Colmenar Viejo. Las referencias documentales son: AVM-S, 3-206-15, 13, 17, 21, 12, 11, 19, 18. Colmenar Viejo aparece en AVM-S, 3-171-16.

¹² Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 1186, exp. 19. En todo caso este nuevo consenso no resultó permanente y en el s. XVIII continuaron los enfrentamientos entre Madrid y Colmenar Viejo, si bien cada vez se enmarcan más dentro de la política forestal encaminada a asegurar la provisión de combustible a la capital.

¹³ En la documentación se menciona en varios casos que limitan con términos de otras localidades.

el término de Lamoheda y el torrente de la Pasadilla, el monte de la Fuente el Vallejo, que todo está comprendido en el dicho exido”¹⁴.

Una segunda concesión fue la aprobación de la ocupación de términos comunales por parte de concejos y vecinos, excluyendo los derechos de Madrid y de las demás localidades del Real, si bien en el caso de tierras destinadas al cultivo debían garantizar la derrota de mieses. A través de estas ocupaciones los concejos se habían reservado un importante patrimonio concejil, bien como pastos y montes comunales (gratuitos para los vecinos) o bien explotados mediante el arrendamiento (bienes de propios). Los vecinos, por su parte, habían obtenido tierras para cultivos o pastizales que les permitía consolidar sus explotaciones. Fuera de estos términos persistían ciertos espacios que mantenían su carácter comunal para los vecinos de Madrid y los demás lugares del Real. Lo más significativo resultaba, por tanto, la renuncia por parte del municipio madrileño a sus derechos sobre buena parte de los recursos comunales en la Sierra. Los habitantes y concejos de este territorio, consolidan legalmente el control sobre estos recursos, lo que han conseguido en la práctica mediante la ocupación y regulación del territorio, pero siempre manteniendo una clara inseguridad jurídica hasta este momento.

Las contrapartidas de Madrid fueron en primer lugar económicas: los concejos del Real aceptaron pagar una serie de sanciones por la modificación del comunal y la pérdida de derechos de los vecinos de Madrid y su término. El importe total ascendió a casi 30.000 ducados que se destinaron a pagar una parte de un nuevo ayuntamiento de Madrid; de la distribución destaca que la mitad de esta cantidad recayera sobre Colmenar Viejo, la localidad más poblada y con el mayor término territorial, en el que los procesos roturadores alcanzaron una mayor escala¹⁵.

El principal objetivo de Madrid en la negociación era el control de la regulación de los recursos forestales en el Real. En todos los acuerdos se impuso como condición que los concejos y vecinos —que se habían asegurado la incorporación de los montes dentro de sus términos de uso exclusivo— debían gestionar estos recursos de acuerdo con la Instrucción de 1574, una norma forestal aprobada por la monarquía para la conservación y ampliación de recursos forestales que garantizaran el abastecimiento de energía a la capital, y que por la ambición de sus objetivos y sus características técnicas constituye una de las leyes forestales más importantes en la España de la Edad Moderna¹⁶. Por otra parte, para garantizarse el control efectivo, Madrid podía enviar cada dos años a un regidor de su ayuntamiento a las poblaciones incluidas; actuando conjuntamente con un oficial local, tenía la misión de revisar el grado de cumplimiento, impedir nuevas modificaciones en los comunales y vigilar el estado de los recursos forestales¹⁷.

Finalmente, las comunidades rurales de la Sierra consiguieron un control efectivo de sus recursos; se había producido así el paso de un comunal compartido a uno local, al menos en una parte muy significativa del territorio. Precisamente como una herencia de la complejidad de

¹⁴ AVM-S, 3-206-21.

¹⁵ AVM-S, Libro mss. 150.

¹⁶ Un estudio detallado de esta norma y de la influencia que tuvo en la legislación forestal posterior, en el trabajo citado en n. 9. En él se incluye una transcripción de dicha instrucción de 1574. Copia en AHN, Nobleza, Osuna, leg. 1743, exp. 13.

¹⁷ Esta condición —pese a que se trata de un ordenamiento forestal de 1574— no aparecía en ninguna de los primeros acuerdos en torno a 1604-5. Su inclusión, por tanto, parece resultar determinante para la aceptación de estos acuerdos por el ayuntamiento madrileño.

situaciones en la delimitación de términos en el pasado, fue necesario concretar derechos de uso en parte de los bienes colectivos no adscritos a una localidad determinada. La solución habitual consistió en establecer derechos cooperativos entre un número reducido de corporaciones locales (normalmente dos), creando por tanto nuevos comunales compartidos. El carácter reducido de los beneficiarios y la falta de asimetría en su acceso permitiría una estabilidad a largo plazo en esta fórmula de gestión, si bien se produjeron conflictos derivados de la voluntad de exclusión de uno de los participantes¹⁸.

Fue este control por parte de los concejos locales (y por tanto de las comunidades campesinas) lo que permitió la adaptación del comunal a las necesidades económicas de los campesinos. La consecuencia fue un cambio progresivo en la organización del espacio y el paisaje resultante. El territorio, que a comienzos de la época medieval sería predominantemente forestal, comenzó a diversificarse, como se refleja a mediados del s. XVIII en el Catastro de Ensenada. Solo en alguna población de montaña como Cercedilla predominaba el uso forestal (59,3% del término), fundamentalmente constituido por un pinar (pino silvestre) de gestión comunal, en el que las cortas se distribuían entre los vecinos para autoconsumo o comercialización. En el resto del área montañosa destaca la importancia del pastizal, muy frecuentemente asociado al monte (rebollos y fresnos); resultado de una intervención humana sobre el bosque original, permite incrementar la productividad por unidad de superficie al mantener una amplia cabaña ganadera. Por su parte, en el piedemonte adquiría la hegemonía el cultivo del cereal: el 47,5% en Galapagar o el 33% en Colmenar Viejo (si bien en esta localidad la mitad del término se consideraba improductivo). El comunal seguía siendo el núcleo vertebrador de esta organización del espacio, como lo evidencia su importancia cuantitativa, ya que suponía tres cuartas partes de la superficie total del Real de Manzanares¹⁹.

La funcionalidad económica del comunal en la Sierra de Guadarrama va mucho más allá de su mera extensión territorial. Al igual que en otros entornos montañosos con predominio de derechos comunales, aportaba una serie de recursos básicos para las economías campesinas: cereales y lino en tierras de cultivo, ganadería en pastizales y montes, y recursos energéticos (leña, carbón vegetal) y materiales de construcción en el bosque. Pero en este caso, la cercanía de un mercado como el que supone la ciudad de Madrid tendría un claro impacto en la orientación productiva del territorio y con ella en las funciones del comunal para las economías campesinas.

Situadas a una distancia de Madrid que oscila entre 30 y 60 Km, las localidades del Real van a poder acceder a ese mercado expansivo que representa la ciudad. Sin embargo, deben darse circunstancias en el entorno rural que permitan la adaptación y respuesta a estas oportunidades. En este sentido la organización productiva y del espacio desarrollada a partir del comunal posibilitó una respuesta adaptativa campesina que se tradujo en la creciente especialización en el abastecimiento al mercado madrileño de combustible y materiales de construcción.

¹⁸ Como el derivado del intento de Cercedilla en 1718 de adquirir como baldío un término compartido con Navacerrada; la reacción de ésta, con el apoyo del titular del señorío y otros concejos del Real, provocó la anulación de la compra. AVM-S, 3-206-17.

¹⁹ C.M. Manuel Valdés considera que la superficie pública estaba infravalorada en el Catastro de Ensenada y estima que en el caso del Real de Manzanares podía ascender al 79,7% del total. MANUEL VALDÉS, C. M. (1996). *Tierras y montes públicos en la sierra de Madrid (Sectores central y meridional)*. Madrid: Ministerio de Agricultura, pp. 71 y 78-87.

La tabla 1 recoge los datos referidos a la arriería en varias poblaciones del Real; de las 23 existentes, tan sólo 3 no mencionan el transporte campesino. El caso de Colmenar Viejo es el único que se separa del patrón común a los demás pueblos, al existir en él un total de 20 carreteros con unos ingresos muy superiores al resto, evidenciando una mayor especialización y capacidad inversora. Por lo demás, la información del cuadro transmite un claro modelo de transportista campesino, que en numerosos pueblos representan la práctica totalidad de los vecinos. Debido a sus “cortas labores” complementan su actividad agraria y ganadera con el transporte de combustible a Madrid; la duración (mínimo de 6 meses) de esta actividad nos indica un claro proceso de especialización. Lo que me interesa destacar es cómo esta carretería se inserta en un proceso productivo controlado por los campesinos en el que los comunales juegan un papel determinante. En efecto, la producción de combustible está en manos de los propios habitantes, que disponen de extensos términos comunes, complementados con las cercas con arbolado que en parte proceden de la apropiación previa del comunal. Asimismo la disponibilidad de fuerza de tiro (bueyes) depende de la dotación de pastizales disponibles tanto en términos públicos como privados (con frecuencia asociados a los montes). Este control integrado de la producción y transporte de combustible era, en definitiva la herencia de la transformación de los derechos comunales que a largo plazo habían protagonizado las comunidades campesinas de la Sierra de Guadarrama.

Tabla 1. La carretería en algunas localidades del Real de Manzanares a mediados del s. XVIII

Localidades	Nº vecinos	Nº carretas	Nº bueyes	Viajes Meses-Viaje/mes	Productos
Becerril	90-100	50	100	6-2	Madera y otros
Cerceda	20	20	50	6-2	Carbón y piedra
Cercedilla	160-170	s.d.	300	6-2	Madera y otros
Collado Villalba	62	50	s.d.	8-4	Leña, jara, carbón y piedra
Guadarrama	90-100	94-95	190	7-2	Piedra, carbón y madera
Hoyo de Manzanares	90	70	150	8-5	Piedra y leña
Los Molinos	70	90	90	6-2	Carbón, madera, piedra y otros

Fuente: Respuestas Generales del Catastro de Ensenada

[ÍNDICE]